

Gasto en consultores de la JCF y el gobierno supera los \$2,000 millones

Denuncian falta de fiscalización en el congreso federal y en el gobierno local

Stephanie L. López, EL VOCERO – 12/02/2025

Desde el 2017 hasta el primer trimestre del 2024, el gasto en consultores, asesores y abogados que contratan la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno, suman más de \$2,000 millones, muy por encima del estimado inicial de \$370 millones que proyectó el Congreso para la implementación de PROMESA.

Así lo reveló el más reciente informe de Espacios Abierto, que identifica que al presente la Junta ha gastado \$308,111,005 para aquellos consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III, \$11,329,555 para el Oficial Examinador y \$1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal, para un total de \$2,021,957,705.

“En cuestión de rendición de cuentas, la fiscalización de estos gastos es prácticamente nula. Y cuando digo nula, me refiero a nivel local, a nivel del Ejecutivo y a nivel del Congreso de Estados Unidos, que al final no son los que están pagando la factura, sino que es el gobierno de Puerto Rico”, denunció Daniel Santamaría Ots, economista y director de Investigación de Espacios Abiertos.

De acuerdo con el economista, la Junta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se han hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños.

Asimismo, indicó que esta situación toma aún mayor relevancia en momentos en que ésta ha solicitado aumentar de \$50 mil a \$100 mil la partida que retienen mensualmente los representantes legales de la Junta. Y la doble vara que utiliza la Junta en los requerimientos que hace a las agencias locales respecto al gasto público y lo que esta se aplica a sí.

“Hace apenas dos días la Junta dijo que la Universidad de Puerto Rico (UPR) debe presentarle avisos formales y evidenciar con documentos los cambios que quiere a sus asignaciones presupuestarias mientras la propia JCF solo documenta y desglosa sus gastos operacionales de manera mensual, pero no es capaz de documentar con transparencia la partida más grande de gastos que incluye sus propios gastos legales y de consultores financieros en el tribunal”, reclamó Santamaría Ots.